

Curicó, diez de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

1º) Denuncia. Con fecha 10 de septiembre de 2022, comparece el abogado don Pedro Ignacio Peña Sánchez, chileno, casado, domiciliado en Avenida Las Condes N° 11.380, Oficina 91, comuna de Vitacura; en representación de doña **MARÍA PAZ VARGAS OSSES** chilena, soltera, trabajadora social, cédula de identidad N° 16.335.583-3, domiciliada en Vicuña N° 1376, Villa Apumanque, Curicó, y deduce demanda de nulidad del despido, despido indirecto y cobro de prestaciones; en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ**, RUT 69.100.100-8, representada legalmente por su Alcalde, don Javier Antonio Muñoz Riquelme, ambos domiciliados para estos efectos en Estado N° 279, comuna de Curicó, conforme a los fundamentos que se resumen a continuación.

Sostiene que su representada comenzó a prestar servicios para la demandada, bajo subordinación y dependencia, a partir del 19 de marzo de 2012, mediante múltiples contratos a honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo encubiertos. Menciona que las labores que desempeñó fueron con constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones. Refiere que trabajó como Coordinadora Comunal de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Curicó, realizando además otras funciones que no eran de su cargo. Afirma que estuvo sujeta a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones. Por estos motivos, expresa que los contratos a honorarios celebrados constituyeron una abierta infracción a la legislación aplicable, tratándose en realidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia.

Detalla que su representada durante todo el tiempo que trabajó a favor de la demandada, esto es, 10 años, 3 meses y 12 días, realizó numerosas funciones y en virtud de éstas, le fueron extendiendo sus labores por un largo periodo. Agrega que nunca fue contratada como funcionaria municipal en ninguna de sus categorías conforme lo dispuesto por la Ley 18.883 y, siendo persona natural,



tampoco estuvo sometida a un estatuto especial de aquellos que aplican a los Municipios.

Indica que debía velar por la correcta implementación técnica, administrativa, y financiera del programa en la comuna; realizar talleres de habilitación laboral con mujeres del programa en distintos horarios; diseñar material metodológico para los talleres y distintas actividades que se desarrollaban con la mujeres de la comuna; colaborar y participar en actividades propias de la comuna, tales como día de la madre, día de la mujer, eventos y actividades relacionadas; participar en reuniones de redes institucionales de la comuna; atender a las mujeres personalmente, vía telefónica, por *WhatsApp*, entre otras; reportar avances del programa de forma permanente tanto a SERNAMEG y a las jefaturas correspondientes; velar por el cumplimiento institucional del programa; entre otras funciones ajenas a su cargo. Lo anterior, no obsta a que las funciones se fueran ampliando durante la extensión de su período laboral.

Relata que fue contratada bajo la norma del artículo 4 de la Ley 18.883, esto es, sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias. Sin embargo, las labores prestadas jamás fueron no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó se pueden catalogar de transitorios y temporales, puesto que, la relación con la demandada se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión. Así, aduce que los servicios se extendieron por más de 10 años y 3 meses, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida.

Continúa mencionando que la antedicha relación laboral terminó el día 1 de julio de 2022, fecha en que decidió “autodespedirse”, y en consecuencia comunicó por escrito a la demandada, su decisión de poner término al contrato de trabajo por haber incurrido ésta en la causal contemplada en el artículo 160 N° 7 del mismo cuerpo normativo, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, enviando copia de esta comunicación a la



respectiva Inspección Comunal. En este contexto, señala que los incumplimientos establecidos en la carta de despido indirecto son: (1) no pago de sus cotizaciones de seguridad social; (2) no escrituración del contrato de trabajo; y (3) no otorgamiento del feriado legal. Acto seguido, sostiene que estos incumplimientos son graves y que se extendieron durante toda la vigencia de la relación laboral.

Destaca que desarrollo sus labores en un contexto de permanencia y en razón a una función intrínseca de la propia Municipalidad. Reitera que sus contratos no correspondieron en la práctica a la ejecución de labores específicas como consultorías o de asesoría, siendo éstas últimas propias de la contratación a honorarios.

Asimismo, refiere que fue objeto de instrucciones por parte de su ex jefaturas directas, doña María José Rojas Herrera, doña Karen Gamboa Apablaza y doña Antonella Morales Escobar; quienes ocuparon sucesivamente el cargo de Encargadas de la Oficina de la Mujer; y, de doña Gina Lorenzini, don Marco León Moraga y doña María Pilar Contardo Jofré; como sucesivos Directores/as de la Dirección de Desarrollo Comunitario. De este modo, afirma que estuvo en todo momento sujeta a la observancia de éstos, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador y en las funciones que se consignan en los contratos celebrados. Añade que estas instrucciones se verificaban diariamente y durante el transcurso de cada semana de manera verbal, por llamadas telefónicas y correos electrónicos y a través de la aplicación *WhatsApp*. Además señala que cumplió con una jornada de trabajo regular propia del ejercicio administrativo que iba de lunes a viernes desde las 08:30 hasta las 17:00 horas, en las dependencias de la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Curicó, ubicadas en Argomedo N° 350, comuna de Curicó. Sin perjuicio de lo anterior, debía también dirigirse a dónde fuera destinada según su jefatura a efectos de realizar sus labores en terreno. Por otro lado, contaba con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa, esto es: oficina compartida, computador, escritorio, impresora, artículos de oficina, credencial, vestimenta y teléfono institucional, entre otros; todos los cuales eran suministrados por el Municipio.



Añade que los contratos suscritos reconocen un grupo de beneficios, sin perjuicio de otros que eran acordados verbalmente y de manera constante durante el desarrollo de las funciones y el tiempo.

Si bien reconoce haber emitido boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de Curicó, argumenta en la práctica recibía la contraprestación directamente del Departamento de Administración y Finanzas, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral, previa confección de un Informe Mensual de Actividades que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual el municipio guarda registro. Así, expresa que para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración íntegra que recibió ascendió a \$1.190.000 mensuales.

Manifiesta que su representada se vio en la necesidad de autodespedirse ante los incumplimientos graves de su empleadora a las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y que ésta le adeuda las cotizaciones de seguridad social, por todo el período trabajado, esto es, entre el día 19 de marzo de 2012 y hasta el 1 de julio de 2022.

Reitera que su representada jamás ocupó la calidad de funcionaria municipal puesto que no fue contratada como personal de planta, a contrata ni suplente, por lo que le resulta aplicable la regla general y común, esto es, las normas del Código del Trabajo.

Previas citas legales y de jurisprudencia, solicita que en definitiva se declare la relación laboral, la continuidad de ésta, la nulidad del despido, que el despido indirecto está justificado, y que, por ende, se le adeudan los siguientes conceptos a que deberá ser condenada la contraria, con reajustes e intereses y costas:

1. Indemnización sustitutiva de aviso previo, por \$1.190.000.
2. Indemnización por años de servicio, por \$11.900.000.
3. Recargo del 50% de la indemnización por años de servicio, por \$5.950.000.
4. Feriados:
 - Feriado legal, por \$8.766.333 que equivalen a 221 días (10 años).



- Feriado proporcional, por \$223.125 que equivalen a 6,25 días (3 meses y 12 días).

5. Otras prestaciones.

- Cotizaciones de seguridad social durante todo el periodo que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal.

- Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar.

2°) Contestación: Con fecha 9 de septiembre de 2022 comparece el abogado don Pedro Américo Figueroa Sepúlveda, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ**, persona jurídica de derecho público, RUT 69.100.100-8, según mandato judicial otorgado por su Alcalde Titular don **JAVIER ANTONIO MUÑOZ RIQUELME**, Contador Público y Auditor, todos con domicilio en calle Estado N°279 Curicó; y contesta la demanda controvirtiendo la totalidad de las afirmaciones vertidas por la actora, y solicitando su rechazo, con costas.

Para lo anterior reproduce la totalidad de la demanda, sosteniendo que niega todo lo expuesto en ella pues la Ley 18.883 establece el marco jurídico aplicable a las personas que se desempeñan laboralmente o prestan servicios profesionales en las municipalidades del país, y que pueden consistir en cuatro modalidades diferentes: a) cargos de planta; b) cargos a contrata; c) contrato de trabajo regido por las normas del Código del Trabajo; y d) contrato de prestación de servicios a honorarios.

En tal contexto, sostiene que la actora prestó sus servicios bajo la figura de la contratación a honorarios del artículo 4 de la Ley 18.883, concretamente para la realización de cometidos específicos.

Por tanto, solicita que se declare que: (a) su representada no ha incurrido en los hechos que se han formulado en la presentación de la demanda; (b) se rechaza en todas y cada una de sus partes la demanda de nulidad del despido, despido indirecto y cobro de prestaciones; (c) no procede el pago de ninguna suma solicitada por la demandante, ni aún las indemnizaciones, feriados, otras



prestaciones, cotizaciones o pagos alegados; y (d) se condene en costas a la demandante.

3º) Audiencia Preparatoria. Con fecha 21 de octubre de 2022 se celebró la respectiva audiencia preparatoria, en la que luego que el tribunal señalara sucintamente los fundamentos de los escritos de la etapa de discusión, realizó el llamado a conciliación, sin éxito.

Acto seguido, se procedió a fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se indican a continuación: (1) existencia de la relación laboral; (2) en la afirmativa del punto anterior, naturaleza y condiciones de la relación laboral; (3) en su caso, fechas de inicio y término de la relación laboral; (4) efectividad de haber cumplido la actora con las formalidades legales del despido indirecto; (5) efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido indirecto y que éstos configuran la causal invocada; (6) si fuere del caso, remuneración de la actora; (7) efectividad de adeudarse por la demandada las prestaciones que se reclaman en la demanda; y (8) efectividad de existir continuidad en la prestación de los servicios de la actora.

4º) Prueba de la demandante. En orden a acreditar sus alegaciones, la actora rindió los medios de prueba que se indican a continuación.

1. Documental:

1.1. Carta de autodespido emitida por la actora, doña María Paz Vargas Osses, con destino a la I. Municipalidad de Curicó, y fotografía a color de comprobante de envío de ésta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 1 de julio de 2022.

1.2. Carta de comunicación de autodespido emitida por la actora, doña María Paz Vargas Osses, con destino a la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó, y fotografía a color de comprobante de envío de ésta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 1 de julio de 2022.

1.3. Decreto Exento N° 000711 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 30 de marzo de 2012, que aprueba la contratación de la demandante.



1.4. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 19 de marzo de 2012.

1.5. Decreto Exento N° 0298 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 5 de febrero de 2013, que aprueba la contratación de la demandante.

1.6. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 8 de enero de 2013.

1.7. Decreto Exento N° 0916 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 7 de marzo de 2014, que aprueba la contratación de la demandante.

1.8. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 24 de febrero de 2014.

1.9. Decreto Exento N° 978 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 2 de marzo de 2015, que aprueba la contratación de la demandante.

1.10. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 26 de febrero de 2015.

1.11. Decreto Exento N° 00653 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 11 de febrero de 2016, que aprueba la contratación de la demandante.

1.12. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 9 de febrero de 2016.

1.13. Decreto Exento N° 0857 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 14 de febrero de 2017, que aprueba la contratación de la demandante.

1.14. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 9 de febrero de 2017.

1.15. Decreto Exento N° 00765 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 2 de febrero de 2018, que aprueba la contratación de la demandante.

1.16. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 30 de enero de 2018.

1.17. Decreto Exento N° 00300 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 17 de enero de 2019, que aprueba la contratación de la demandante.

1.18. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 17 de enero de 2019.



1.19. Decreto Exento N° 01806 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 22 de abril de 2020, que aprueba la contratación de la demandante.

1.20. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 13 de abril de 2020.

1.21. Decreto Exento N° 1377 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 15 de abril de 2021, que aprueba la contratación de la demandante.

1.22. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 12 de abril de 2021.

1.23. Decreto Exento N° 0737 emitido por la Ilte. Municipalidad de Curicó, de 9 de febrero de 2022, que aprueba la contratación de la demandante.

1.24. Contrato a honorarios suscrito entre las partes de 2 de febrero de 2022.

1.25. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 51, todas del año 2012.

1.26. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 52 a 65, todas del año 2013.

1.27. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 66 a 76, 78 a 79 y 81, todas de 2014.

1.28. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 82 a 91, y números 93, 96, 99 y 100, todas del año 2015.

1.29. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 102 y 103, del 105 a 110, y del 112 a 117, todas del año 2016.

1.30. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 118 a 121 y del 123 a 132, todas del año 2017.

1.31. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, número 133 y del 135 a 147, todas de 2018.



1.32. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 148 a 157, 159 a 162, y número 164, todas del año 2019.

1.33. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 165 a 167 y del 169 a 178, todas del año 2020.

1.34. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 180 a 193, todas del año 2021.

1.35. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora, con cargo a la Ilte. Municipalidad de Curicó, números 194 a 199, todas del año 2022.

1.36. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó de los meses de enero a abril, y de junio, agosto y noviembre, todas del año 2013.

1.37. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó los meses de enero a abril, y de junio a diciembre, todas del año 2014.

1.38. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó de los meses de enero a abril, y de julio a diciembre, todas del año 2015.

1.39. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó de los meses de enero a agosto, y de octubre a diciembre, todas del año 2016.

1.40. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó de los meses de enero a marzo, y de mayo a diciembre, todas del año 2017.

1.41. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó de los meses de enero a marzo, y de junio a diciembre, todas del año 2018.

1.42. Lista de actividades de la actora emitida por la Ilte. Municipalidad de Curicó del año 2019.



1.43. Informe de gestión y planificación mensual realizado por la actora de los meses de enero, marzo, mayo, junio, y de septiembre a diciembre, todas del año 2020.

1.44. Informe de gestión y planificación mensual realizado por la actora de los meses de febrero, marzo, de mayo a julio, y de septiembre a noviembre, todas del año 2021.

1.45. Informe de gestión y planificación realizado por la actora de los meses de enero a junio, todas del año 2022.

1.46. 16 fotografías a color de la demandante en actividades de la Ilte. Municipalidad de Curicó.

2. Confesional:

2.1. Sergio Rodrigo Olave Ríos, RUT 14.551.521-1, Director de Gestión de Personas de la Ilte. Municipalidad de Curicó, domiciliado en Estado N° 279, Curicó.

3. Testimonial:

3.1. Natalia De Los Ángeles Bustos Camilo, RUT 16.336.467-0, trabajadora social, con domicilio en Hanga Roa N° 1943, Curicó.

3.2. Paula Stephanie Hernández Díaz, RUT 17.012.639-4, psicóloga, con domicilio en Torres del Paine N° 316, Población Santa Fe, Curicó.

3.3. Pedro Alexis Maturana Valenzuela, RUT 13.505.213-2, con domicilio en Calle 22 Norte N°3352, Talca, licenciado en sociología.

4. Exhibición de documentos:

4.1. Contratos y/o convenios suscritos entre la actora y la Ilte. Municipalidad de Curicó y, debidamente visados, correspondientes al período que va desde el 19 de marzo de 2012 hasta el 1 de julio de 2022.

4.2. Decretos o resoluciones en donde se aprueba la contratación de la actora y la Ilte. Municipalidad de Curicó, correspondientes al periodo que va desde el 19 de marzo de 2012 hasta el 1 de julio de 2022.



4.3. Informes de gestión mensual emitidos por la actora y visados por la jefatura correspondiente de la Ilte. Municipalidad de Curicó, correspondientes al periodo que va desde el 19 de marzo de 2012 hasta el 1 de julio de 2022.

Para estos efectos, la demandada exhibe únicamente los documentos que constan en los folios 54 a 57 del expediente virtual, esto es, (1) Decreto Exento N°432, de fecha 24 de enero de 2020, de la Municipalidad de Curicó; (2) Contrato a Honorarios, de fecha 14 de enero de 2020, suscrito entre doña María Paz Vargas Osses y la Municipalidad de Curicó; (3) Oficio N° 175, de fecha 18 de noviembre de 2022, de la Jefa del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Curicó; y (4) Certificado N°306, de fecha 12 de noviembre de 2022, del Director de Gestión de Personas de la Municipalidad de Curicó.

La demandante, a su turno, sostuvo que la exhibición de la contraria fue sólo parcial, por lo que solicitó que se haga efectivo el apercibimiento legal.

Habiéndose conferido traslado a la demandada, ésta se opuso a lo solicitado por la actora, refiriendo que no fue posible reunir la totalidad de los documentos por su antigüedad.

El Tribunal quedó en resolver en la presente sentencia definitiva la petición de la actora.

5. Oficios:

5.1. AFP MODELO, folios 43 y 44 del expediente virtual.

5.2. ISAPRE NUEVA MÁS VIDA, folios 39, 40 y 41 del expediente virtual.

5.3. AFC CHILE S.A., folio 46 del expediente virtual.

5°) Prueba de la demandada. Por su parte la demandada rindió en juicio las probanzas que se indican a continuación.

1. Confesional:

1.1. María Paz Vargas Osses, C.I. N°16.335.583-3, domiciliada en Vicuña 1376, Villa Apumanque, Curicó, trabajadora social.

2. Testimonial:



2.1. María Pilar Contardo Jofré, C.I. N°13.351.763-4, Trabajadora Social, domiciliada en Estado 279 Curicó (laboral).

2.2. Mildred Alejandra Fuentes Cáceres, C.I. N°14.485.522-1, Asistente Social, domiciliada en Estado 279 Curicó (laboral).

2.3. Claudia Cristina Véliz Poblete, C.I. N°13.353.107-6, Asistente Social, domiciliada en Población Huaiquillo Pasaje Kiwi 807 Curicó.

3. Exhibición de documentos:

3.1. Contrato suscrito entre la actora y la Municipalidad de Curicó, debidamente visado y Decreto Exento que aprueba dicho contrato, correspondiente al 01.01.2015.

3.2. Contrato suscrito entre la actora y la Municipalidad de Curicó, debidamente visado y Decreto Exento que aprueba dicho contrato, correspondiente al 01.01.2016.

La demandante no exhibe los documentos refiriendo que éstos no existen. Ante ello, la demandada solicita que se haga efectivo el apercibimiento legal. El Tribunal quedó en resolver la incidencia en la presente sentencia definitiva.

6°) En cuanto a la relación laboral reclamada en la demanda. La actora ha comparecido ante este tribunal, solicitando, en lo medular, que se declare que entre ella y el municipio demandado ha existido una relación laboral que se ha extendido de forma continua entre los días 19 de marzo de 2012 y 1 de julio de 2022, fecha esta última en que procedió a su despido indirecto. De esta manera, asegura que las múltiples contrataciones a honorarios que han sido pactadas entre las partes, en realidad sólo encubrían dicho vínculo laboral, pues fueron celebradas con infracción a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 18.883. Por su parte, la demandada ha negado que entre las partes haya existido una relación laboral, sino sólo múltiples contrataciones a honorarios para cometidos específicos, según lo permite el artículo 4 del señalado estatuto de la Ley 18.883.

Frente a dicho asunto litigioso, es preciso destacar que la correcta resolución de este caso no pasa tanto por analizar si en la especie concurren los indicios de laboralidad en los términos descritos en los artículos 7 y 8 del Código



del Trabajo, como suele ocurrir con la generalidad de las acciones de declaración de relación laboral; sino, más bien, por examinar si la celebración y ejecución de las contrataciones a honorarios de autos respetaron el marco normativo expresado en el artículo 4 de la Ley 18.883. Lo anterior, pues estamos frente a un organismo público que debe ceñir su actuar al principio de legalidad, de manera que si ha existido una infracción a dicho estatuto, no quedaría más que concluir que la prestación de los servicios de la actora se enmarcó dentro de las normas de derecho común, en este caso, de la normativa del Código del Trabajo. En otras palabras, el municipio no podría alegar que se está frente a una mera prestación civil de servicios a honorarios, en desmedro de los derechos de la actora, si no ha respetado las normas que la autorizarían para proceder a tal tipo de contrataciones.

Dicho lo anterior, conviene ahora recordar que el artículo 4 de la Ley 18.883 establece lo siguiente:

“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”.

Como se puede apreciar, el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 18.883, regula una primera hipótesis en que es lícito que los municipios contraten servicios a honorarios, esto es, cuando se trate servicios prestados por profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, pero siempre que correspondan a *“labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad”.*



Con posterioridad, el mismo artículo 4, en su inciso 2°, establece una hipótesis normativa diversa que también facultaría a los municipios para proceder a este tipo de contrataciones a honorarios, que está referida a “cometidos específicos”, y que es aquella que precisamente ha invocado la demandada en autos.

Conforme a lo descrito, este juez concluye que no es jurídicamente correcto atribuir a la hipótesis normativa de *cometidos específicos* del inciso 2°, las exigencias propias de accidentalidad y no habitualidad del inciso 1°. Lo anterior, pues, resulta evidente que el legislador ha regulado estas hipótesis como supuestos habilitantes diversos, tanto por haber sido regulados en incisos distintos, como también por el claro tenor literal de la ley. Así, el señalado artículo 4, luego de regular la posibilidad de contratar servicios a honorarios para labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, con posterioridad y en un inciso diverso, expresa que los municipios “*además*” podrán contratar a honorarios la prestación de servicios para “*cometidos específicos*”. De esta manera, la voz “*además*” empleada por el legislador, resulta inequívoca en cuanto se trata de una situación diversa y que se adiciona a aquella que regula el inciso primero.

En la línea de análisis antes apuntada, corresponde así destacar que para el adecuado tratamiento de este caso, es dable descartar de entrada todas las alegaciones de la actora tendientes a cuestionar la legalidad de sus contrataciones a honorarios por el sólo hecho de no haber ejercido labores accidentales o no vinculadas con aquellas que habitualmente desarrollaría el municipio, pues el análisis, como se dijo, no debe centrarse en las exigencias contempladas en el inciso primero del artículo 4 de la Ley 18.883, sino sólo en aquellas contenidas en el inciso segundo del señalado precepto.

De igual modo, es preciso ahora analizar qué significa el concepto de “cometidos específicos”.

Desde la perspectiva de su sentido natural obvio y conforme a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “cometido” significa “comisión” o “encargo”. A su turno, “comisión”, puede ser entendido como “*Orden y facultad*



que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio” o “Encargo que alguien da a otra persona para que haga algo”. Por otro lado, la palabra “específico” significa “Que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas” o “Concreto”, entendiéndolo por esto último, en oposición a lo abstracto, como algo preciso, determinado y sin vaguedad.

De esta forma y desde un punto de vista semántico, es posible entender la expresión “cometido específico”, como aquel encargo que se realiza a otra persona, que responde a la ejecución de algo preciso y determinado. Asimismo, y desde una perspectiva normativa, se deben destacar dos aspectos de suma relevancia: que la especificidad requerida en la ley no dice relación con las labores particularmente ejercidas, sino con el “encargo”; y que tal exigencia de especificidad no se vincula con los requisitos de accidentabilidad y no habitualidad del inciso primero del artículo 4 de la Ley 18.883, pues, de lo contrario, no habría mayor diferencia entre ambas hipótesis descritas por el legislador.

De acuerdo a este marco normativo, es pertinente advertir ahora que en autos no existió mayor controversia en que la actora fue contratada en el marco de un programa de jefas de hogar de la comuna de Curicó, mismo que responde a los convenios suscritos en el transcurso del tiempo entre el municipio demandado y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género -SERNAMEG-. Lo anterior, fue además claramente refrendado por la prueba confesional y testimonial de ambas partes, indicándose en general que las contrataciones de la demandante eran anuales, siguiendo a su vez las duraciones de los respectivos convenios suscritos entre el municipio y el SERNAMEG (y SERNAM en una primera época). Asimismo, al revisar los decretos aprobatorios de las contrataciones de la actora, se puede apreciar que en todos ellos se hace alusión expresa a estos convenios.

En efecto, el Decreto Exento N° 000711 de 30 de marzo de 2012, menciona dentro de sus “VISTOS”, el “...*Convenio suscrito entre la Municipalidad de Curicó y SERNAM*”; para luego resolver “*APRUEBASE, los Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios de las personas que se indican a continuación, con la específica finalidad de llevar a cabo el Programa de ‘Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar’, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato suscrito por las*



partes.”, señalando finalmente a la actora con el cargo de “Coordinadora Comunal”. Análogas referencias son posibles de advertir en todos los demás decretos, constando sólo algunas diferencias terminológicas. Así, por ejemplo, el Decreto Exento N° 978 de 2 de marzo de 2015, aprueba “...los Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios de las personas que se indica a continuación, con la específica finalidad de llevar a cabo el Programa de ‘Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Asociatividad y Emprendimiento’, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato suscrito por las partes...”, para volver a señalar a continuación a la demandante como *“ENCARGADA COMUNAL Programa Mujeres Jefas de Hogar”*. De igual modo, en el “VISTOS” del Decreto Exento N° 00300 de 17 de enero de 2019, se señala al *“Convenio de Transferencia y Ejecución SERNAMEG del ‘PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR’, de la Comuna de Curicó y la Municipalidad de Curicó.”*, aprobándose después la contratación a honorarios de la actora como Coordinadora Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar.

En un sentido similar, todos los contratos a honorarios suscritos por la demandante aluden de manera explícita al programa en cuestión. Así, la cláusula primera del contrato de 19 de marzo de 2012, establece que *“La Municipalidad de Curicó, en virtud de las facultades que le otorga el Art. 4° de la Ley N° 18.883, contrata sobre la base de honorarios a la Srta. MARIA PAZ VARGAS OSSES, con el objeto que realice el trabajo específico de de (sic) Coordinadora Comunal del Programa ‘Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar’”*, misma cláusula que se reitera en términos análogos en todos los demás contratos. Además, la gran mayoría de estos contratos aluden a que los honorarios de la profesional serán cargados a la transferencia de fondos del SERNAMEG, o señalan qué meses serán de cargo del municipio y qué otros de este último servicio público.

Adicionalmente, se puede observar que a contar del contrato de fecha 30 de enero de 2018 existe un mayor detalle respecto de las labores a ejecutar por parte de la profesional, incluyendo, entre otras, elaborar diagnósticos sobre las brechas de género y la realidad del trabajo (remunerado y no remunerado) de las mujeres jefas de hogar a nivel local; construir y diseñar el proyecto comunal según la pertinencia territorial, considerando las orientaciones técnicas entregadas por



SERNAMEG; implementar el programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación, ejecución, seguimiento y evaluación); establecer gestión de redes con todos los servicios públicos representados en la comuna e instituciones privadas presentes, para gestionar actividades y apoyos en el ámbito del fomento productivo, económico, acceso al financiamiento y espacios de comercialización para fortalecer los emprendimientos de trabajadoras por cuenta propia, como a su vez generar apoyos en beneficio de las mujeres para asegurar el acceso a la oferta que apoye la inserción laboral; participar u organizar mesas vinculantes de las redes; establecer coordinación y buscar alianzas en las empresas, a objeto de hacerlas partícipes en el proceso de intermediación e inserción laboral; coordinar con departamentos municipales medidas y acciones que permitan mejorar la gestión del programa; mantener informadas, a las jefaturas y autoridades del municipio sobre el Programa; y otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en materia de oferta pública para mujeres del programa.

De esta manera, resulta evidente que las contrataciones de la actora se enmarcan en los referidos programas de mujeres jefas de hogar, mismos que encuentran su causa directa en los respectivos convenios suscritos entre el Municipio y el SERNAMEG. A su turno, estos programas eran renovados periódicamente al tiempo que tales servicios pactaban nuevos convenios análogos.

Llegado a este punto, se debe advertir que la actora de autos no ha reclamado en forma alguna que sus contrataciones a honorarios han transgredido los convenios suscritos entre la Municipalidad y el SERNAMEG, así como tampoco la validez ni los alcances de estos últimos. De hecho, ni siquiera aportó al juicio copia de estos convenios, ni tampoco requirió su exhibición a la contraria en los términos que faculta el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo. Por el mismo motivo, no queda más que estimar que los convenios suscritos entre el Municipio y el SERNAMEG son plenamente válidos y que las contrataciones a honorarios de la actora se ajustan plenamente a dichos pactos.

Conforme se ha venido analizando, este juez estima que las contrataciones de la actora, al menos en lo que respecta a su celebración, cumplen cabalmente con las exigencias previstas en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 18.883,



pues todas ellas dan cuenta de un “cometido específico”, en donde su especificidad deriva precisamente de la circunstancia que están circunscritos a los programas que nacen de los convenios existentes entre la Municipalidad y el SERNAMEG. Luego, el hecho que estos convenios y programas se hayan renovado sucesivamente a lo largo del tiempo, no hace cesar el carácter de cometido específico, pues siempre se ajustaron a tales convenios, los que en cada período tenían una duración definida y unos objetivos delimitados. En otras palabras, es irrelevante que las contrataciones de la actora hayan sido renovadas todos estos años, pues en cada periodo ellas se ajustaron a los convenios respectivos. Por estas razones y al menos en lo que respecta a la celebración misma de estos contratos a honorarios, éstos no pueden tenerse como constitutivos de una relación laboral indefinida.

Cabe aquí realizar algunas precisiones. Tanto el municipio demandado como el SERNAMEG, en cuanto órganos del Estado y al tenor de lo previsto en el inciso 4° del artículo 1 de la Constitución Política de la República, tienen la finalidad de promover el bien común, existiendo áreas en las que sus mandatos legales se intersectan.

En tal sentido, el inciso 2° del artículo 1 de la Ley 18.695 define que la finalidad de las municipalidades es *“satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.”* Asimismo, el artículo 3 letra c) de la citada ley establece como función de los municipios *“La promoción del desarrollo comunitario”*. Adicionalmente, el artículo 4 letra k) del mismo cuerpo legal prevé que las Municipalidades *“podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con (...) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”*.

Tal normativa, es plenamente armónica con las funciones encomendadas al SERNAMEG en el artículo 2 de la Ley 19.023, en particular sus literales f) y g) en cuanto entregan a dicho servicio las tareas de *“Coordinar con los distintos servicios y organismos públicos la ejecución de las políticas, planes y programas relativos a la equidad de género y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres”* y *“Celebrar convenios con organismos públicos y*



privados, tanto nacionales como internacionales, para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del servicio.”.

Tales preceptos deben además ser concordados con el principio de coordinación contemplado en los artículos 3 y 5 de la Ley 18.575. Así, es especialmente importante el inciso 2° del artículo 5 de la referida ley que prescribe que *“Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.”.*

En tal marco normativo tenemos entonces que la Ilustre Municipalidad de Curicó está en la necesidad de satisfacer entre otras múltiples funciones, la de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que es coincidente con los mandatos legales del SERNAMEG. Al mismo tiempo, la demandada, al igual que el resto de los municipios del país, disponen de medios limitados, lo que se traduce en materia de recursos humanos en una dotación predefinida y acotada, conforme a los diversas calidades jurídicas que la ley prevé para sus servidores. Sin embargo, en aquellas áreas en las que sus funciones coinciden con otros servicios públicos, es perfectamente posible, y no sólo eso, sino que además es deseable, que ejerza programas y actividades coordinadas y/o conjuntas con estos últimos en aras de promover y alcanzar el bien común.

De esta manera, desde la perspectiva del interés comunitario es sumamente positivo la existencia de convenios entre los municipios y otros organismos públicos a fin de lograr un cometido más eficaz y eficiente de sus objetivos; y tanto mejor si tales convenios logran extenderse en el tiempo y son ejecutados por profesionales idóneos. En esta línea de análisis, no se ve inconveniente alguno para que estos programas -como aquél en que la actora prestaba sus servicios- sean renovados sucesivamente en el tiempo, siendo esto una cuestión que no tiene ningún reproche desde el punto de vista legal.

Conforme a lo dicho, no existe ninguna infracción al inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883 por la circunstancia que la actora haya prestado servicios por más de 10 años en el Municipio demandado y bajo el cobijo de los programas derivados de los convenios suscritos entre tal entidad y el SERNAMEG. Pensar lo



contrario, llevaría al absurdo que los municipios para mantenerse dentro de los márgenes legales deberían cesar los servicios de las y los profesionales adscritos a estos programas, aun cuando hayan realizado un trabajo positivo y de alta calidad, lo que además conspiraría en contra de los señalados principios de eficacia y eficiencia que deben guiar a los organismos públicos, perjudicando en definitiva a la comunidad.

En efecto, no sólo hubiese sido perjudicial para la propia actora que el municipio no hubiese renovado su contratación a honorarios una vez celebrado un nuevo convenio con SERNAMEG, sino que ello hubiese sido perjudicial también para las vecinas de la comuna Curicó, pues se les habría privado de los servicios de una profesional idónea, con experiencia y capacitada.

Como se viene diciendo y no habiendo existido cuestionamiento alguno a los convenios suscritos en la demandada y el SERNAMEG, así como tampoco respecto de una eventual falta de correspondencia entre éstos y las contrataciones a honorarios de la actora, se debe concluir que en relación a la celebración misma de sus contratos, se cumplen plenamente las exigencias del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883, en donde la especificidad de sus encargos deriva precisamente de los convenios pactados entre dichos servicios públicos.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para desestimar la demanda de autos, pues toca todavía analizar si la ejecución de los servicios de la actora se ciñó efectivamente al marco de estos contratos.

Tal y como se indicase anteriormente, los contratos de la actora en su mayoría en cuanto a la descripción de sus funciones se remiten de manera explícita a los programas de los que dan cuenta los convenios suscritos en cada caso con el SERNAMEG, ya sea como encargada o coordinadora de los mismos.

Por su parte, la prueba testimonial de la actora tiende a circunscribir las labores efectuadas por ella a los márgenes de los citados programas.

Así, la testigo doña Natalia De Los Ángeles Bustos Camilo, sostuvo que la demandante era coordinadora comunal del programa jefas de hogar, explicando que éste respondía a un convenio entre la Municipalidad y el SERNAMEG.



Además, señaló que la actora *“debía cumplir con todos los lineamientos del cargo”*.

En un sentido similar, el testigo don Pedro Alexis Maturana Valenzuela refirió que la demandante trabajaba para la municipalidad de Curicó *“en un programa dependiente del SERNAMEG”*, y al ser consultado por sus labores específicas dijo que ella ejecutaba el programa jefas de hogar y que eso conllevaba una serie de tareas tales como el diagnóstico de la situación local, el diseño y planificación del proyecto comunal y la ejecución de diversas actividades vinculadas con su cargo. Sin perjuicio de ello, sostuvo además que la actora también ejecutaba labores propias de la municipalidad y que eran ajenas al programa para el que había sido contratada. Sin embargo, sobre este último punto, no dio razón de sus dichos, al no haber referido ninguna actividad o labor concreta y, de hecho, al ser después nuevamente consultado sobre cómo era el *“día a día”* del trabajo de la demandante, se limitó a señalar que éste se concentraba en la planificación del trabajo con las mujeres, detallando que eso se traducía tanto en talleres como en trabajo administrativo como, por ejemplo, poblar el sistema informático con todos los datos aportados por las acciones del programa, a lo que cabía adicionar labores colaborativas con otros colegas de la región por su experticia en materia de emprendimiento femenino.

Como se puede ver, los dichos de este testigo, más allá de la escueta y genérica afirmación relativa a que la actora también realizaba labores que excedían el objeto de sus contrataciones, fueron bastante específicos y claros en circunscribir las tareas concretamente descritas a los programas derivados de los convenios con SERNAMEG.

A su turno, la testigo doña Paula Estefanía Hernández Díaz, sostuvo que la actora era la encargada comunal del programa mujer jefas de hogar y que *“veía todo lo del programa”*. No obstante lo anterior, dijo además que ella también realizaba *“otras actividades de la municipalidad”* y al ser consultada sobre a qué tipo de actividades se refería, dijo que ello respondía a *“ferias en la plaza”, “día de la madre”, “día de la mujer”* y *“Spa en tu barrio”*, señalando, por ejemplo, que en una ocasión estuvieron hasta tarde tomando datos de mujeres, para manicure, masajes, verano entretenido en la playa o incluso debían servir almuerzo a las



mujeres que ahí participaban. No obstante estos dichos, no resulta claro para este juez que las tareas mencionadas por la testigos sean ajenas a los programas para los cuales fue contratada la demandante; primero, pues a falta de todo mayor detalle, al menos en principio parecen vincularse con temáticas que comúnmente pueden ser comprendidas como propias de la temática de género y cuyas beneficiarias pueden perfectamente ser mujeres jefas de hogar del programa; y segundo, porque se debe recordar que la actora en su demanda no realizó mención ni cuestionamiento alguno a los convenios suscritos entre la municipalidad y el SERNAMEG, así como tampoco aportó al juicio dichos instrumentos ni tampoco solicitó su exhibición a la contraria, correspondiendo a ella la carga de haber acreditado la existencia de una verdadera relación laboral indefinida.

Con la información hasta ahora analizada, pareciera que en autos no es posible fundar una relación laboral entre la actora y el municipio, pues sus contrataciones respetaron los márgenes del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883 y además porque la ejecución de sus labores respetó los márgenes establecidos en sus contratos y consecuentemente las exigencias del citado precepto.

Sin embargo, no se puede dejar de considerar los dichos de la testigo de la municipalidad doña María Pilar Contardo Jofré, quien detenta el cargo de Directora del Departamento de Desarrollo Comunitario de Curicó y que es precisamente el departamento al cual se encontraban adscritos los programas para los cuales la demandante prestaba sus servicios.

Dicha testigo, en general dio cuenta de las características de los programas que se derivan de convenios con otras entidades públicas y en especial aquellos suscritos con SERNAMEG. Asimismo, relató los periodos en que la actora fue contratada a honorarios por la municipalidad, así como también las labores que realizaba como coordinadora del programa mujeres jefas de hogar. Sin embargo, reconoció que no siempre ejerció sus labores dentro de los márgenes de dichos programas, refiriendo que en el año 2020 y como corolario de la pandemia por COVID 19, la municipalidad se vio en la necesidad de hacer frente a una serie de contingencias, en las que la demandante colaboró.



Así, sostuvo que la municipalidad tuvo cuatro grandes focos que la obligó a adaptarse al nuevo escenario, esto es, asistencia social, registro social de hogares, entrega de alimentos del programa alimentos para Chile y el programa de cocinas solidarias. En este contexto explicó que había muchos funcionarios que por temas de salud y edad estaban con teletrabajo y que había otros servicios públicos colaboradores que tampoco podían realizar sus tareas.

Es por ello que tratándose de los programas por convenios con otras instituciones, la municipalidad acordó con sus contrapartes que quienes prestaban servicios en dichos programas colaborasen con las funciones ya mencionadas (asistencia social, registro social de hogares, entrega de alimentos del programa alimentos para Chile y el programa de cocinas solidarias). Así, afirmó que esto es lo que pasó en el caso de la actora, pues en esa época tuvo que prestar servicios, especialmente en materia del registro social de hogares. Posteriormente, aclaró que “lo más grueso” de estas colaboraciones de la demandante en materias propias de la contingencia de la pandemia se realizó entre los meses de abril y agosto o septiembre de 2022. Consultada por el tribunal si estos cambios se hicieron constar en anexos a los contratos y/o en algún tipo de decreto, refirió que ello no ocurrió, que sólo hubo reuniones con SERNAMEG de las cuales se levantaron actas y que “parece” que SERNAMEG emitió un documento.

En orden a lo descrito precedentemente, resulta patente que si bien las contrataciones de la demandante en sus orígenes y durante gran parte de sus ejecuciones se ciñeron a lo previsto en los respectivos contratos a honorarios, al menos desde abril de 2020, sus labores desbordaron claramente tales instrumentos de prestación de servicios y en consecuencia, fueron ejecutadas al margen del “cometido específico” que normativamente justificaba la prestación de servicios a horarios según lo previsto en el artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883.

De esta suerte, la situación excepcional dada por el contexto sanitario a causa del COVID 19 no es una justificación suficiente para que la actora haya sido destinada a labores ajenas a su cometido específico y que se vinculan con las funciones generales que debe satisfacer la municipalidad y que no se relacionan de modo alguno con los convenios suscritos con SERNAMEG y ni siquiera con alguno de sus mandatos legales. Si el municipio debía hacer frente a esta nueva



realidad, debió hacerlo con sus funcionarios de planta o a contrata. Al contrario, al haberlo hecho a través de los servicios de la actora, transgredió el citado inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883 mutando desde entonces su vinculación con la entidad municipal desde una prestación de servicios a honorarios a una verdadera relación laboral.

Lo anterior es simple. Mientras la actora se mantuvo circunscrita a labores propias de su cometido específico, esto es, a los programas objeto de los convenios suscritos con SERNAMEG, su vinculación se mantuvo como una contratación a honorarios; sin embargo, al haber comenzado la demandante a realizar tareas en favor del municipio, ajenas a su cometido específico y que nada tienen que ver con SERNAMEG, se transgredió el artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883 y al no estar afecta a ninguna modalidad estatutaria, necesariamente debe calificarse dicha vinculación como una relación laboral.

Por otro lado, se debe señalar que el supuesto acuerdo al que habría llegado la municipalidad con SERNAMEG para destinar a los profesionales de sus programas a labores diversas, no tiene ninguna incidencia en autos; pues más allá que ello no puede ser tenido por acreditado con los meros dichos de la testigo, esto es, incluso de ser efectivo y conforme al principio de legalidad, dicho acuerdo en caso alguno podía haber vulnerado lo prescrito en el artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883, sin mencionar además que se trataría de un pacto completamente ajeno a la voluntad de la actora y que por ende se vio obligada a cumplir precisamente porque en ese momento pasó a estar bajo la subordinación y dependencia del municipio, propia del contrato de trabajo consensual del que se viene hablando.

En este sentido, este juez concluye que la actora logró acreditar su aseveración fáctica relativa a que durante su prestación de servicios tuvo que realizar labores ajenas a los programas para los que había sido contratada, pero ello sólo a contar del día 1 de abril de 2020, conforme a los dichos de la propia Directora de la DIDECO.

Luego, tal relación laboral debe ser calificada como de duración indefinida, pues, primero, esa es la regla general en nuestro ordenamiento laboral, esto es, si



no se pacta expresamente una modalidad diversa, necesariamente el contrato de trabajo debe ser considerado como uno de carácter indefinido; y, segundo, porque si bien la testigo refirió que “lo más grueso” de las labores ejercidas por la actora por fuera de sus contrataciones a honorarios se había extendido hasta agosto o septiembre de 2020, de modo alguno afirmó una fecha cierta de término.

En definitiva, se tendrá que entre las partes existió una relación laboral que se extendió desde el día 1 de abril de 2020 y hasta el momento de su despido indirecto, esto es, el día 1 de julio de 2022.

Con todo, se debe destacar que las listas de actividades rendidas por las actora a la municipalidad y los informes de gestión y planificación que fueron incorporados por la demandante en los numerales 1.36. a 1.45. de su prueba documental no tienen la aptitud para desvirtuar la extensión de la relación laboral ya tenida por establecida. En efecto, en lo que dice relación a los periodos anteriores a abril de 2020, se puede apreciar en la documentación que las actividades allí consignadas en general están directamente vinculadas con los programas para los que fue contratada la demandante, y si bien en ocasiones tal información puede resultar un tanto vaga, lo cierto es que en sí mismas no pueden ser totalmente desvinculadas de dichos programas, pues perfectamente pueden referirse a usuarias finales de los mismos. En tal sentido, se debe recordar que la carga de acreditar la existencia de una relación laboral recaía en la actora. Luego, en lo que respecta a los meses posteriores a abril de 2020 y no obstante que estos reportes nada dicen en cuanto a actividades propias de la contingencia sanitaria, este juez estima que ello no es suficiente para descartar la efectividad de tales tareas, pues fueron reconocidas en juicio por la propia Directora de la DIDECO.

Por otro lado, el set de fotografías incorporadas por la actora tampoco es idóneo para modificar las conclusiones ya señaladas, pues dichas fotografías no dan cuenta de ninguna información específica en relación a las fechas, contexto y actividades a las que concretamente están referidas.

Adicionalmente, se debe señalar que todos aquellos aspectos alegados por la actora como “indicios de laboralidad”, tales como uso de uniforme y credencial



municipal, uso de instalaciones y equipos del municipio, adscripción a la Oficina de la Mujer, dependiente de la DIDECO y reconocimiento de ciertos beneficios como permisos que coinciden con aquellos propios de funcionarios de planta o a contrata; carecen de toda incidencia respecto del período previo a abril de 2020 en la medida que en autos se respetó la exigencia de un “*cometido específico*” del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883, pues sus contratos a honorarios y las labores ejecutadas en su virtud se ajustaron a los términos, duración y objetivos de los programas que periódicamente eran pactados por el Municipio y SERNAMEG.

Finalmente, se debe desestimar una alegación realizada por la demandada en sus observaciones a la prueba referidas a que si en autos no se lograba acreditar una relación laboral continua en el período exactamente señalado en la demanda y a pesar de eso el tribunal igualmente acogía la demanda por un periodo diverso, ello necesariamente implicaba incurrir en un vicio de *ultra petita*.

Al efecto, este juez estima que el presente fallo no está incurriendo en el referido vicio de nulidad, pues el período donde se está reconociendo la relación laboral alegada por la actora, precisamente está incluido dentro de aquél, más amplio, que fue señalado en la demanda, y por ende, se está dentro de los márgenes de la litis. Asimismo, en cuanto a la causa de pedir, una de las alegaciones fundamentales de la demanda para reclamar la existencia de una relación laboral indefinida, estuvo dada por la circunstancia que los servicios prestados por la actora respondían a funciones generales de la municipalidad no dándose a su respecto los requisitos del artículo 4 de la Ley 18.883, incluida la circunstancia de estarse frente a un cometido específico; y entonces, por principio de legalidad y no encontrándose adscrita la demandante a ninguna vinculación estatutaria, sus servicios necesariamente debían ser calificados como una relación laboral regida por el contrato de trabajo. Como se puede apreciar, esta sentencia se ajusta plenamente a las peticiones formuladas en la demanda (aunque en una entidad menor a la reclamada), así como también a sus causas de pedir.

7°) En cuanto a la justificación del despido indirecto. Como punto de partida, conviene advertir que en autos fue la actora quien puso término a su contrato de trabajo por medio de la figura del despido indirecto regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo.



Así y conforme a las probanzas aportadas por la demandante en los numerales 1.1. y 1.2. de su documental, se puede tener por establecido que con fecha 1 de julio de 2022 puso término a su relación laboral, a través de la respectiva comunicación, misma que funda tal decisión en la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, en el incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Adicionalmente, se puede apreciar que la señalada carta de despido indirecto fue remitida el mismo día 1 de julio de 2022 tanto a la demandada como a la Inspección del Trabajo, por lo que en autos es posible tener por acreditado que la actora cumplió con las formalidades legales de su autodespido.

Luego, en cuanto a los hechos consignados en la carta de despido indirecto para fundar la causal invocada, ésta refiere las siguientes circunstancias: (1) no pago de cotizaciones de seguridad social; (2) no escrituración del contrato de trabajo; y (3) no otorgamiento del feriado legal.

En cuanto al primer hecho fundante, esto es, al no pago de cotizaciones de seguridad social, éste se puede tener por plenamente acreditado en autos, pues la actora prestó sus servicios formalmente como a honorarios y, por ende, la municipalidad no cumplió con su obligación de enterar las cotizaciones ante las entidades respectivas, asunto que además aparece corroborado por las respuestas recibidas a los oficios dirigidos a AFP Modelo, ISAPRE Nueva Masvida y AFC Chile, donde se puede apreciar que en el período en análisis no consta ningún pago de cotizaciones que haya sido efectuado por el municipio demandado.

En tal sentido, este juez estima que el hecho que la actora haya estado en condiciones de pagar íntegramente sus propias cotizaciones previsionales con cargo a los honorarios entregados por el municipio, en nada hace variar lo analizado, pues ello pasa por alto la circunstancia que en una relación laboral es la empleadora la obligada al pago de las mismas y que de hecho, el inciso 2° del artículo 3 de la Ley 17.322, expresamente prescribe que “Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores”, para luego agregar que “Si se hubiere omitido



practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.”.

Sobre el particular, se ha dicho que uno de los fundamentos del despido indirecto guarda relación con la equidad y la justicia dado que “...*si en un contrato bilateral una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra puede desligarse del vínculo jurídico, dejando sin efecto la relación contractual...*” y que ello se da, entre otras hipótesis, ante un “*Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, como por ejemplo el no pago de las remuneraciones, el no pago de las cotizaciones previsionales, un jus variandi abusivo, el no otorgar ocupación efectiva y adecuada, el no respetar las normas sobre licencias médicas, etc.*” (Sergio Gamonal Contreras y Caterina Guidi Moggina. Manual del Contrato de Trabajo. Santiago: Thomson Reuters, 2015, páginas 461 y 462).

Por otro lado, jurisprudencialmente se ha sostenido de manera reiterada que el no pago de cotizaciones previsionales constituye un incumplimiento grave por parte del empleador de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo y que, por ende, es constitutivo de la causal de término del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo y habilita al trabajador para proceder a la figura del despido indirecto. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema, en los autos Rol 31.913-2019, expresamente señaló que el no pago por parte del empleador de las cotizaciones de seguridad social, “...*sólo puede ser calificado de grave, por lo que permite configurar la causal de terminación de contrato prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, que conforme al artículo 171 del mismo cuerpo legal puede ser esgrimida por el trabajador en contra del empleador y cuya consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes.*”.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la actora fundó además el despido indirecto en la no escrituración del contrato de trabajo y en el no otorgamiento del feriado legal. Al efecto, este juez estima que estas circunstancias en el presente caso no revisten la suficiente gravedad para dar por terminado el contrato de trabajo; pues, primero, no se rindió prueba en autos que diera cuenta que la demandante haya siquiera instado alguna vez durante la relación laboral por la escrituración de su contrato de trabajo y además porque el vínculo laboral



se ha tenido por acreditado sólo desde abril de 2020, por lo que un poco más de 2 años sin feriado legal, con pandemia de por medio, no pareciera tener la entidad necesaria para configurar la causal invocada y sin haberse ventilado en el juicio alguna otra circunstancia fáctica para ponderar la gravedad de tal circunstancia.

De esta manera, se tendrá en autos por configurada la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, pero sólo por el no pago de las cotizaciones de seguridad social de la demandante. Por lo anterior, se condenará a la empleadora al pago en favor de la actora de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, más el recargo del 50% del artículo 171 inciso 1° del Código del Trabajo.

8°) Respecto de la base de cálculo y el monto de las indemnizaciones por la justificación del despido indirecto. La demanda afirma que se debe considerar para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo la suma de \$1.190.000, suma que es plenamente coincidente con los últimos honorarios mensuales que le fueron enterados por la demandada, según se puede apreciar de las boletas de honorarios aportadas por la actora. Es por lo anterior y no existiendo además un monto diverso que haya sido expresa y concretamente alegado por la municipalidad es que se tendrá el señalado monto de \$1.190.000 como remuneración de la demandante para todos los efectos legales.

Es por lo anterior, que se condenará a la demandada al pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo por \$1.190.000 y una indemnización por años de servicio por \$2.380.000. Asimismo, se condenará al municipio al pago del recargo del 50% a que se refiere el artículo 171 inciso 1° del Código del Trabajo, por un valor de \$1.190.000.

9°) Sobre el cobro de prestaciones. En primer lugar, se debe reiterar que en autos se ha tenido por acreditado que la demandada adeuda la totalidad de las cotizaciones previsionales de la actora por el periodo respecto del cual se ha tenido por acreditada la existencia de la relación laboral. Sin perjuicio de lo anterior y en atención a lo dispuesto en la Ley 17.322, para la liquidación y cobro de la totalidad de las cotizaciones adeudadas, se ordenará oficiar a las entidades



respectivas, teniendo especialmente en consideración para estos efectos lo dispuesto en el artículo 4 bis de la mencionada ley.

Asimismo, habiéndose reclamado la compensación del feriado legal y proporcional, atento a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil y no habiéndose rendido por la demandada probanza alguna que dé cuenta que la actora ha hecho uso de sus días de feriado o que éstos fueron debidamente compensados al término de la relación laboral, es que la municipalidad será condenada a dichas prestaciones.

De esta manera, y teniendo presente la extensión de la relación laboral, esto es, desde el 1 de abril de 2020 al 1 de julio de 2022; se tendrá que la actora tenía derecho a un total de 30 días hábiles de feriado legal y a 3,75 días hábiles de feriado proporcional, lo que totalizan 33,75 días hábiles. Asimismo, habida cuenta de la fecha de término de la relación laboral -1 de julio de 2022- y al tenor de lo previsto en los artículos 69 y 73 del Código del Trabajo, tales 33,75 días hábiles se traducen en 49,75 días corridos que equivalen a \$1.973.417.

10°) En relación a la nulidad del despido. No obstante que se ha tenido por acreditado que al momento del despido indirecto existía una deuda previsional de parte de la municipalidad, este juez estima que en la especie no resulta aplicable la nulidad del despido regulada en el artículo 162 del Código del Trabajo.

En este sentido, este juez adscribe plenamente a la doctrina sustentada por la Excelentísima Corte Suprema, a través de fallos de unificación de jurisprudencia, conforme a los cuales la señalada sanción de la nulidad del despido no es procedente tratándose de organismos públicos cuando los trabajadores han prestado sus servicios formalmente a honorarios y es la sentencia la que declara la existencia de la respectiva relación laboral.

Así, nuestro Máximo Tribunal de manera uniforme y consistente en los últimos años ha sostenido, entre otras causas, en los autos Rol 27.650-2019 que *“...tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, a juicio de esta Corte, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, [la nulidad del despido] cual es que fueron*



suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.”, para luego afirmar que “...en otra línea argumentativa, la aplicación –en estos casos– de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.”. De esta manera, la Excelentísima Corte Suprema finalmente concluye que “no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector”.

Conforme a lo razonado, se desestimaré la acción de nulidad del despido incoada por la actora.

11°) Análisis del resto de la prueba. El resto de la prueba rendida y no valorada expresamente hasta el momento en nada cambia lo ya analizado.

Sobre el particular y tratándose de la prueba de la actora, se debe mencionar que la absolución de posiciones de don Sergio Rodrigo Olave Ríos, en general se centró en las características del programa para el cual la demandante prestaba sus servicios, las fechas en que ésta estuvo vinculada con la municipalidad en virtud de sucesivos contratos a honorarios; y algunas otras circunstancias tales como que el programa se sigue ejecutando hasta el día de hoy -como consecuencia que se mantiene vigente el último de los convenios suscritos con SERNAMEG- y que las labores de la demandantes eran prestadas por regla general en el propio municipio, nada de lo cual es suficiente para fundar en la especie una relación laboral con anterioridad al mes de abril de 2020, según ya fuera explicado, pues en realidad no obstan en modo alguno a las exigencias del inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883.



Por otro lado, es necesario advertir que la falta de exhibición íntegra de los documentos requeridos al municipio carece en la presente causa de sustancialidad. En efecto, la falta de exhibición de la totalidad de los contratos y convenios suscritos entre la demandante y la municipalidad, y de los correspondientes decretos aprobatorios, carece de toda relevancia, desde que fue la propia actora la que incorporó tales antecedentes al juicio. Otro tanto sucede con los informes de gestión mensual, pues fue la actora la que incorporó un conjunto importante de ellos y no parece razonable pensar que los informes faltantes hayan podido aportar una información muy diversa a la ya analizada en esta sentencia.

Es por estos motivos que se desestimará la petición de la actora de hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo por los documentos no exhibidos en la audiencia de juicio.

En relación a la prueba de la demandada, se debe señalar que la absolución de posiciones de la actora en general estuvo centrada en hechos respecto de los cuales no ha existido mayor controversia, esto es, en lo fundamental, que suscribió múltiples contratos con el municipio, todos a honorarios y no propiamente contratos de trabajo, al menos desde el punto de vista formal. Por otro lado, la municipalidad abordó especialmente la circunstancia que en el desarrollo de las múltiples contrataciones desde 2012 a 2022 existirían dos días que no se encontrarían cubiertos por ninguno de dichos contratos, esto es, el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016, como modo de cuestionar la continuidad laboral alegada en la demanda. Sin perjuicio de lo insignificante que pudiera parecer que en un periodo de más de 10 años hayan existido sólo dos días -feriados por los demás- en los que no habría existido una contratación a honorarios, lo cierto es que tales fechas son anteriores a aquélla en que se fijó en esta sentencia el comienzo de la relación laboral de autos; y por tanto, tales circunstancias carecen todo mérito para alterar lo resuelto, siendo inoficioso realizar mayores consideraciones a su respecto.

Lo mismo se puede decir, respecto de los dichos de las testigos doña Mildred Alejandra Fuentes Cáceres y doña Claudia Cristina Véliz Poblete, pues nuevamente se centraron en las características de los programas para los cuales



la demandante prestaba sus servicios y en la pretendida falta de continuidad de los mismos, por los señalados días 1 de enero de 2015 y 1 de enero de 2016.

Por último, la exhibición de documentos requerida a la demandante, tampoco tiene ningún valor especial, pues únicamente estuvo dirigida a intentar demostrar que los días 1 de enero de 2015 y 1 de enero de 2016 no se encontraban cubiertos por ningún contrato a honorarios, lo que, según se ha dicho, carece de toda relevancia para alterar los hechos específicamente tenidos por establecidos en esta sentencia. Por el mismo motivo, se negará lugar a la petición del municipio de hacer efectivo a su respecto el correspondiente apercibimiento legal.

12º) Costas de la causa. Teniendo presente que ninguna de las partes ha resultado totalmente vencida, cada una deberá soportar las costas en que hubiere incurrido.

Por estas razones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 63, 67, 69, 71, 73, 160, 162, 171, 172, 173, 425, 443, 445, 446, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 461 y 462 del Código del Trabajo; y 1698 del Código Civil; **SE RESUELVE** que:

I.- No se hace lugar a las peticiones realizadas por la actora y por la demandada en orden a hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, respecto de la contraria, por los documentos no exhibidos en la audiencia de juicio.

II.- Se hace lugar a las acciones de despido indirecto y cobro de prestaciones, interpuestas en estos antecedentes por doña **MARÍA PAZ VARGAS OSSES**, cédula de identidad N° 16.335.583-3; en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ**, RUT 69.100.100-8, **sólo en cuanto se declara que:**

1. La actora trabajó ininterrumpidamente para la demandada, bajo subordinación y dependencia, entre los días 1 de abril de 2020 y 1 de julio de 2022.



2. La empleadora incurrió en la causal de término de la relación laboral contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo.

3. La actora en virtud del artículo 171 del Código del Trabajo procedió justificadamente con fecha 1 de julio de 2022 a la figura del despido indirecto.

4. La remuneración mensual de la actora ascendía a \$1.190.000.

5. Se condena a la demandada a pagar a la actora los siguientes conceptos:

a) \$1.190.000, por indemnización sustitutiva de aviso previo.

b) \$2.380.000, por indemnización por años de servicio.

c) \$1.190.000, por aumento del 50% de la indemnización por años de servicio.

d) \$1.973.417, por compensación de feriado legal y proporcional.

e) Las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado. Para estos efectos, una vez ejecutoriada la presente sentencia, ofíciase a AFP Modelo; ISAPRE Nueva Masvida y AFC Chile, para que procedan a la liquidación y oportuno cobro de todas las cotizaciones adeudadas en el período trabajado por la actora en favor de la demandada, esto es, desde el día 1 de abril de 2020 al 1 de julio de 2022; bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 4 bis de la Ley 17.322.

III.- No se hace lugar a la acción de nulidad del despido, interpuesta en estos antecedentes por doña **MARÍA PAZ VARGAS OSSES**, cédula de identidad N° 16.335.583-3; en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ**, RUT 69.100.100-8.

IV.- Todas las sumas ordenadas pagar, deberán serlo con sus respectivos reajustes e intereses, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Cada parte deberá soportar las costas en que hubiere incurrido.



VI.- Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase dentro de quinto día, bajo apercibimiento de iniciarse de oficio su ejecución conforme a lo previsto en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Archívese en su oportunidad.

RIT O-255-2020

RUC 22-4-0427645-3

Dictada por don **ERICK FABIÁN RÍOS LEIVA**, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó.-



A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>